



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Liliana Quintero Pabón
DEMANDADA:	Colpensiones, Protección S.A. y Skandia SA
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-013-2021-00184-01 (309) 05001310501320210018401

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante en el archivo 05Alegatos y Poder Skandia - 02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Skandia a la doctora Juliana Araque Quirzo con Tarjeta Profesional 293.693 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

En la ciudad de Medellín, a los veintisiete (27) días de abril de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, Y CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Skandia S.A., así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **LILIANA QUINTERO PABÓN** en contra de **COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A.**, y de **SKANDIA S.A.** frente a la decisión adoptada por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

1. ANTECEDENTES:

La señora Liliana Quintero Pabón presentó demanda en contra de Colpensiones, Skandia S.A. y Protección S.A. buscando se declare la ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); que se condene a Protección S.A. a trasladar todos los aportes efectuados en su favor, por motivo de afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas de las aseguradoras, con todos sus frutos como; rendimientos financieros, intereses y gastos administrativos, y a Colpensiones a validar los aportes trasladados y que a incorporarlos en su historia laboral, y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que se trasladó del RPMPD al RAIS el 01/01/2007, sin que cumplieran con el buen consejo al no brindarle información clara y completa de los beneficios, contras y/o consecuencias del traslado y en el 07/04/2021 solicitó al RAIS información de su pensión y la aceptación de traslado. El 2/03/2021 solicitó a Colpensiones la aceptación del traslado, con respuesta negativa de la misma fecha.

Admitida la demanda subsanada e integrada la litis, Colpensiones, Protección S.A. y Skandia SA se contestaron oportunamente, oponiéndose a las pretensiones de la demanda.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 13 de octubre de 2022, con fundamento en que tanto Protección SA como a Skandia SA no lograron demostrar el cumplimiento del deber de información a la demandante, ilustrándola sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, por cuanto los documentos incorporados no advierten qué tipo de información recibió la demandante con ocasión del traslado pensional y la migración entre administradoras del RAIS, que la cláusula de libre voluntad de afiliación de los formularios no es suficiente para demostrar el deber de

información, y que el interrogatorio de parte tampoco es convincente, por ser pocas las confesiones que se pueden extraer del mismo y, aun cuando es cierto que la demandante confesó haber conocido la existencia de una fecha límite para retornar al RPMPD y haber recibido una asesoría sobre el particular, la validez de esta reasesoría no convalida situación del cumplimiento de deber de información. Declaró la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS por Protección SA y Skandia SA, condenó a PROTECCIÓN S.A a trasladar a la COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, el valor de la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo para el efecto cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración vigentes a partir del 01/09/1998 hasta el 31/03/2006 y nuevamente a partir del 01/01/2007 exclusivamente por la afiliación de la demandante, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, debidamente indexados. Condenó a SKANDIA S.A., a trasladar a COLPENSIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, las cuotas y/o gastos de administración cobradas por la afiliación de demandante entre el 1 de abril de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. Debidamente indexadas. Ordenó a COLPENSIONES a recibir tales sumas de dinero, y a activar la afiliación del señor LILIANA QUINTERO PABÓN, al régimen de prima media con prestación definida, y a las costas.

3. RECURSO DE APELACIÓN:

3.1 RAZONES DEL RECURSO

La apoderada de Skandia S.A. se mostró inconforme con la decisión, respecto a la orden de devolver los gastos y cuotas de administración de manera indexada, ya que los valores cumplieron un cometido mientras estuvo vigente la afiliación de la demandante con ese fondo lo que implicó que efectuara gestiones de administración de su cuenta de ahorro individual; que trajo como consecuencia lógicas cuotas o gastos de administrativo previstos por la ley, los cuales cumplieron su cometido por la administración de ese fondo, por lo que no se encuentran en su patrimonio, y de devolverlos a Colpensiones ello implicaría un enriquecimiento sin causa.

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. ALEGATOS DEMANDANTE

El apoderado de la demandante solicita que, en el evento de confirmar la sentencia de primera instancia, esta sea adicionada en el sentido de condenar en Costas y agencias en derecho en esta instancia a los apelantes, en la tasa máxima permitida razón del desgaste desmesurado del aparato judicial por parte de los demandados.

4.2. ALEGATOS SKANDIA S.A.

La procuradora judicial argumenta en su escrito que actuó de buena fe en relación con la afiliación que realizó de manera libre, voluntaria y consciente tal como quedó expresado en el formulario de afiliación, cuya forma preimpresa se encuentra ajustada a los requisitos establecidos en el artículo 11 del decreto 692 de 1994, siendo dicho documento prueba suficiente de la libertad de la afiliación de la accionante al RAIS, que la información se entregó de manera verbal y personalizada, que ha cumplido con todas las obligaciones de carácter legal a su cargo durante el período de afiliación de la accionante; que el porcentaje de aportes con destino a los seguros de invalidez y sobrevivencia, fueron trasladados a las respectivas aseguradoras contratadas por ella y con los que ha tenido el afiliado cobertura; que incluso en el RPM un porcentaje de la cotización también se destina a los gastos de administración y a las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia en igualdad de condiciones, tal y como lo dispone el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no puede desconocerse la gestión y los seguros tomados por las AFP durante la afiliación en el RAIS, ante la eventual revocatoria del fallo proferido y una eventual declaración de la ineficacia o nulidad del traslado de régimen pensional.

4.3. ALEGATOS COLPENSIONES

La apoderada de Colpensiones, se ratificó en los argumentos del recurso en primera instancia; señala a su vez que la sentencia objeto de apelación repercute en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación (con efectos patrimoniales) en cabeza de COLPENSIONES, como la única administradora del Régimen de Prima Media; que fue la AFP privada quien incumplió con su deber legal como se demostró en el proceso; que se debe analizar la proporcionalidad de

la decisión, y de no acoger tal petición, se confirme la decisión en la devolución y reintegro de todas las suma de dinero ordenadas y de manera indexada; así como que se mantenga la absolución de condena en costas a su cargo.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala del recurso de apelación y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

5.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si se debe declarar la ineficacia del traslado de la demandante Liliana Quintero Pabón, con el consecuente regreso al RPMPD administrado por Colpensiones, y, en caso de ser así establecerá cuáles son las consecuencias que de ello se derivan.

5.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado, está probado que la demandante nació el 12 de junio de 1970 como se observa en la fotocopia de la cédula obrante en el expediente administrativo allegado por Colpensiones (folio 39 archivo 20); se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, en noviembre de 1989, como se infiere de la historia laboral expedida por Protección (folio 39 a 32 archivo 02 y fl. 53 a 67 archivo 22). Se trasladó al RAIS al fondo privado Protección SA a través de solicitud del 9/07/1998 formato afiliación (fl. 35 archivo 22), luego se trasladó en el RAIS a Skandia SA en 8/02/2006 según formato de afiliación (folio 20 y 23 archivo 19) efectiva en marzo de 2206 según estado de cuenta de Skandia SA (fl. 26 y 27 archivo 19); y finalmente retornó a Protección S.A. el 26/11/2006 como se observa en el formato de vinculación de Protección SA (folio 36 archivo 22), movimientos y traslados de régimen que se corroboran con el certificado de Asofondos (fl. 39 archivo 22).

5.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto que debemos observar consiste en recordar que, de acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, en cualquier forma, desconozca ese derecho, se hará acreedor a las sanciones del inciso 1º del artículo 271 de la misma ley. Esta última norma establece que cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo a considerar es que, si bien la afiliación es libre y voluntaria, también es cierto que, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de tal manera que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Acerca del deber de información la CSJ desde la sentencia SL-31989 de 2008, sentó una jurisprudencia muy sólida que se mantiene inclusive hasta esta parte, que es importante memorar:

(...) Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; (...) su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado,

Por lo tanto, no le asiste razón a la recurrente por cuanto es insuficiente afirmar que la afiliada expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, porque no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado cuando se carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a las circunstancias particulares del afiliado, tal como lo establecen los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993 la entidad administradora siempre ha estado obligada a brindarla.

Es decir, el fondo de pensiones tiene la responsabilidad de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, todos aquellos elementos que resultan determinantes para tomar una decisión plenamente informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, cuando se alega por el afiliado la ausencia de información o la deficiente entrega de ésta por parte de la AFP, es la administradora quien tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, afirmación que encuentra respaldo en el artículo 1604 del Código Civil, pues esta norma señala: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*».

De tal manera que, al haberse afirmado por la actora que al «*no brindarle una información clara y completa de los beneficios, contras y/o consecuencias del traslado*», por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Por lo tanto, conviene no olvidar el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, vertido en la SL19447-2017, en ella profundizó sobre la constatación del deber de información, afirmó que era ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación era insuficiente. Es por ello que «*el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea*» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021), la cual no se infiere de la simple firma del formulario de afiliación.

Se insiste, el cumplimiento del deber de información por parte de las AFP y su acreditación en el proceso, no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, ellas resultan insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la respectiva administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, eran Protección S.A. y Skandia S.A. quienes debían probar en el proceso que brindaron una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiaria del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien tanto Protección S.A. como Skandia S.A. afirmaron al contestar la demanda que a la actora se le brindó la asesoría requerida para el caso (archivo 19 y 22 primera instancia), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenían la carga de acreditarlo, sin embargo, ninguna prueba arrimaron que dé cuenta de la información realmente suministrada a la demandante en ese momento, pues como

lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que la demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

5.4 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, **todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante**; por lo que es legítimo que tanto Protección S.A. como Skandia S.A. trasladen a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados como lo dijo la juez de instancia y como lo ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad

87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga; correspondiéndole a Skandia S.A. y a Porvenir S.A. devolver los gastos de administración las primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, todo debidamente indexado. Debiéndose confirmar en este punto la decisión, resaltando en lo correspondiente a la indexación, que esta Corporación se ciñe a los parámetros establecidos recientemente por nuestro órgano de cierre, en sentencias SL 359-2021 y especialmente la SL 950 de 2022, en la que se señala:

... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adocinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

Y es que no comparte la Sala tampoco los argumentos expuestos por la apoderada judicial de Skandia S.A. relativo a la no devolución de las cuotas de administración, por cuanto si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que los mismos están previstos tanto para el RPM como para el RAIS, y en los artículos 60 y 104 de la referida ley se establece su pago a cargo de los afiliados, lo cierto es que ante la declaratoria de la Ineficacia del traslado de régimen pensional, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la misma, estos no se pueden generar en favor de la Administradora del Fondo privado de pensiones demandada.

En virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, la Sala adicionará la decisión en el sentido de precisar que Protección SA y Skandia SA deberán trasladar además de cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración, con los rendimientos que se hubieren causado, aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, así como las sumas adicionales de la aseguradora para cada vigencia de la demandante en cada fondo respectivamente, Protección SA vigentes del 01/09/1998 hasta el 31/03/2006, y Skandia SA para el período del 01/04/2006 al 31/12/2006.

Así mismo, se complementará la sentencia de primer grado disponiendo que el traslado de los recursos tanto por Protección SA y Skandia SA deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información

discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, *“...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...”*.

4.4 PRESCRIPCIÓN

La excepción de prescripción no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo cual se debe predicar la imprescriptibilidad de la presente acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se adicionará y confirmará.

Costas de segunda instancia a cargo de Skandia S.A. las agencias en derecho se fijan en \$2.320.000 para la recurrente y a favor de la demandante. Con respecto a Colpensiones no hay a la imposición de condena en costas pues se conoció en grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6. DECIDE:

PRIMERO: Adicionar el numeral **Segundo** de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de octubre de 2022, en cuanto a disponer que las obligaciones impuestas a **Skandia S.A.** y **Protección S.A.** deberán

trasladar las sumas adicionales de la aseguradora para cada vigencia de la demandante en cada fondo respectivamente, Protección SA vigentes del 01/09/1998 hasta el 31/03/2006, y del 01/01/2007, y Skandia SA para el período del 01/04/2006 al 31/12/2006; así mismo que deberán entregar la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

TERCERO: Costas de segunda instancia a cargo de Skandia S.A., las agencias en derecho se fijan en \$2.320.000 para la recurrente y en favor de la demandante. No imponer condena en costas a cargo de Colpensiones.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ